No. 38/2021

Síntesis: Una mujer comparece mediante escrito de queja, para hacer del conocimiento la posible violación de derechos humanos atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado, en virtud de considerar diversas irregularidades e inconsistencias en la carpeta de investigación iniciada por la muerte de su hijo y su pareja sentimental, en el Municipio de Bocoyna.

En virtud de las investigaciones realizadas, este organismo considera que el Ministerio Público incumplió con sus obligaciones de investigar, conforme a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131, fracciones I, II, V, VIII, IX, XVI y XXIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en consecuencia, violó los derechos humanos de "A", previstos en los artículos 20, fracción I, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracciones II, V, IX, XIV, XVII y XXII del Código Nacional de Procedimientos Penales, numerales a cuyo contenido se hace alusión en las premisas legales establecidas en la presente determinación.

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”

“2021, Año de las Culturas del Norte”

Oficio No. CEDH:1s.1.180/2021

Expediente: MGA-377/2019

RECOMENDACIÓN No. CEDH:5s.1.038/2021

Visitador Ponente: Lic. Eddie Fernández Mancinas

Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2021

LIC. ROBERTO JAVIER FIERRO DUARTE

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PRESENTE.-

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación con la queja presentada por “A1”, con motivo de actos u omisiones que consideró violatorios a sus derechos humanos, radicada bajo el número de expediente **MGA-377/2019**; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6 y 12 de su Reglamento Interno, procede a resolver lo conducente, según el estudio de los siguientes:

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva de los nombres de algunas de las personas que intervinieron en los hechos, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un documento anexo. Lo anterior con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 68, fracción VI y 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 7, 16, 17, 18, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 16 y 171, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua; 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 8, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y demás aplicables, así como de conformidad al Acuerdo de Clasificación de Información, que obra dentro del expediente de queja en resolución.

I.- ANTECEDENTES:

1. Con fecha 16 de julio de 2019, se recibió el escrito de queja de “A”, en el cual manifestó textualmente lo siguiente:

“...Que en los términos del presente escrito, me permito solicitar su intervención, para que se emita una Recomendación para el titular de la Fiscalía General del Estado, derivado de la deficiente integración de la carpeta de investigación, que se identifica con el número señalado al rubro, y que me permito señalar detalladamente en el presente escrito, con la finalidad de que me apoyen para la revisión de estos hechos y se analice la actuación de los diversos agentes del Ministerio Público que han estado integrando la carpeta de investigación y que corresponden a la localidad de Creel, municipio de Bocoyna, mismos que me permito señalar en los siguientes términos:

Hago de su conocimiento una serie de irregularidades e inconsistencias que se han presentado durante la integración de la carpeta de investigación que se identifica con el número único de caso “B”, misma que se está integrando por parte del actual coordinador de unidad foránea, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Acusación de los Delitos, en la sección municipal de Creel, municipio de Bocoyna, toda vez que no obstante el excesivo tiempo transcurrido, la carpeta de investigación no se ha integrado en su totalidad y adolece de una investigación seria, profesional y exhaustiva por parte de los agentes ministeriales, aunado al constante cambio de agentes del Ministerio Público, todo lo cual ha repercutido en una deficiente investigación, a pesar del suceso tan lamentable y trágico que aconteció, y del cual no se tienen resultados en la referida investigación.

Los antecedentes que dieron origen a la carpeta de investigación son los siguientes:

1. El 27 de mayo de 2017, mi hijo "C", se encontraba en compañía de su pareja sentimental "D" en el domicilio de mi señora madre, en un rancho que se ubica en el poblado de Creel, y ese sábado 27 de mayo mi tía "E" le indicó a mi hijo que si la podía llevar a las 09:30 de la noche, a un salón de fiestas que se encuentra en el poblado de Creel, ya que acudiría a una fiesta de quince años de una persona conocida de mi tía, por lo que, a la hora indicada, mi hijo "C" en compañía de su pareja sentimental "D" se trasladaron en una camioneta suburban color verde, modelo 1996 propiedad de la suscrita a llevar a mi tía y a su esposo, el señor "F", al lugar donde se celebraría el evento indicado dejando a mi tía y a su esposo en el referido lugar y mi hijo y su pareja sentimental se regresaron al domicilio donde vivían.

2. Es el caso de que mi hijo y su pareja sentimental nunca llegaron de regreso al domicilio donde vivían, por lo que el domingo por la mañana me llamó mi madre "G" y me comentó que mi hijo y su pareja no habían regresado a dormir al domicilio, y que un hermano mío de nombre "H" había visto la camioneta en la que se trasladaba mi hijo, la cual se encontraba a una distancia aproximada de 200 metros de donde vivía mi hijo, y sin que ninguna persona estuviera en la referida camioneta.

3. Una vez que recibí la llamada de mi madre y me comentó lo anterior, procedí a trasladarme al poblado de Creel, ya que me encontraba en el poblado de San Juanito, y una vez que llegué a Creel, comencé a buscar a mi hijo y a su pareja sentimental, acudiendo incluso a presentar la denuncia respectiva por desaparición de personas ante los agentes ministeriales del poblado de Creel.

4. El domingo 28 de mayo, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, los agentes ministeriales de la policía de Creel me informaron que habían encontrado dos cuerpos que coincidían con las características de mi hijo y su pareja sentimental, y que los encontraron a un lado de la carretera que

está para ir a San Rafael, que se ubica como a 15 minutos del poblado de Creel, siendo que los referidos agentes ministeriales, me indicaron que los cuerpos serían trasladados al municipio de Cuauhtémoc, en donde se les practicaría la necropsia a los cuerpos, para determinar la causa de la muerte, ya que en el poblado de Creel no se contaba con el personal médico especializado para realizar la citada revisión médica.

5. La suscrita y el señor "I", padre de la señorita "D", nos trasladamos al municipio de Cuauhtémoc, a las oficinas del Ministerio Público, en donde nos mostraron unas fotografías de los cuerpos que habían encontrado los agentes ministeriales, y los reconocimos plenamente como el cuerpo de mi hijo "C" y también de la señorita "D", y en el certificado de defunción de ambas personas, en el rubro de causas de la defunción, se establece que fue por laceración cerebral por proyectil de arma de fuego, ya que ambos cuerpos habían recibido un disparo de arma de fuego.

6. Una vez que se realizaron ante el agente del Ministerio Público las identificaciones de cadáver, nos fueron entregados los cuerpos de mi hijo y de su pareja sentimental para sepultarlos en el poblado de Creel, y todas las constancias ministeriales que se realizaron ante el agente del Ministerio Público de Cuauhtémoc se incorporaron a la carpeta de investigación que se identifica con el número único de caso "B", continuando con la integración de la carpeta de investigación la licenciada "J", la cual era la coordinadora de la Unidad Foránea Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Acusación de los Delitos en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna.

7. A pesar de que la suscrita le ha proporcionado diversa información a la agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación, además de que han acudido a declarar diversas personas en relación a estos lamentables hechos, la agente del Ministerio Público y los agentes de la policía ministerial, no han realizado una verdadera labor de investigación

sobre este doble homicidio, y no obstante que hasta la fecha ha transcurrido un año y ocho meses, la agente del Ministerio Público no cuenta con un informe de investigación por parte de los agentes ministeriales, además de que le he solicitado en diversas ocasiones que me proporcione copia de la carpeta de investigación, y hasta la fecha no me ha proporcionado las copias solicitadas ni me ha informado del resultado de la investigación.

8. Durante la entrevista de la identificación de cadáver realizada por la suscrita, señalé que mi hijo anteriormente había vivido con una mujer de nombre "K", y que con ella tenía muchos problemas, por lo que se separaron, pero esa mujer no dejaba en paz a mi hijo, ya que le mandaba mensajes, y en ocasiones le mandaba hablar y lo amenazaba con que fuera a verla, ya que dicha mujer nunca aceptó que mi hijo la hubiera dejado por tener otra pareja sentimental, sin que los agentes de la policía ministerial hayan realizado alguna investigación en relación con esta persona.

9. De igual forma, señalé en mi declaración ante el agente del Ministerio Público, que el día que desapareció mi hijo, lo acompañaba otra persona de nombre "L", misma persona que tampoco ha sido investigada por los agentes ministeriales.

10. La coordinadora de la Unidad Foránea Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Acusación de los Delitos en Creel, la licenciada "J", solicitó en fecha 29 de mayo de 2017 al coordinador de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía Zona Occidente, que se emitiera una pericial criminalística de campo, a efecto de determinar la mecánica de los hechos, así como una planimetría forense, con la finalidad de indicar el lugar del evento y una fotografía forense, a efecto de que fije las evidencias localizadas en el lugar de los hechos, del cuerpo del occiso y de la necropsia practicada al mismo, sin que se cuente hasta la fecha, con el resultado de dicha solicitud, no obstante el excesivo tiempo

transcurrido y del cual tampoco se me proporcionó información, ni me proporcionaron copias de la carpeta de investigación.

Es por todo lo anterior, que solicito su intervención y Recomendación para que se ordene a la agente del Ministerio Público encargada de la integración de la carpeta de investigación, que se sirva enviarme copia de todo lo actuado en la referida carpeta y que también proceda a continuar con la investigación, para declarar a las personas indicadas con anterioridad, y se logre la identificación de los responsables para poder solicitar la audiencia ante el juez de control". (Sic).

2. Con fecha 14 de mayo de 2020, se recibió el oficio número FGE-18S.1/1/451/2020, signado por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, mediante el cual rindió el informe de ley relacionado con los hechos motivo de la queja, señalando lo siguiente:

"...I.2. Antecedentes del asunto.

De acuerdo con la información recibida por parte de la Fiscalía de Distrito, Zona Occidente, relativa a la queja interpuesta por "A", se informan las actuaciones realizadas por la autoridad.

1. *De la información remitida por parte de la Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales Zona Occidente, se comunica que el día 28 de mayo de 2017, se inició la carpeta de investigación número "B" en la Unidad de Delitos Varios-Creel, toda vez que se recibió aviso de la Policía Ministerial, de la localización de dos cuerpos sin vida, al parecer por causas violentas; llevándose a cabo el 29 de mayo de 2017 el reconocimiento de los cadáveres, quienes fueron identificados como "D" y "C", obrando dentro de dicha carpeta lo siguiente:*
 - *Registro de cadena de custodia de fecha 28 de mayo de 2017.*

- *Informe Policial Homologado de fecha 10 de octubre de 2017.*
 - *Acta de entrevista de la testigo “M”, de fecha 29 de mayo de 2017.*
 - *Informe en Materia de Genética Forense, de fecha 21 de noviembre de 2017.*
 - *Informe en Criminalística de Campo, con fecha 03 de junio del 2017.*
 - *Seriado fotográfico de fecha 03 de junio del 2017, en el cual constan 23 fotos del lugar del hallazgo.*
 - *Examen de Rastreo Hemático, emitido el 25 de junio de 2017.*
 - *Informe pericial en material de Genética Forense de fecha 06 de noviembre de 2017.*
 - *Informe de Toxicología y Alcoholemia, emitido el 25 de junio de 2017.*
2. *Asimismo, a fin de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuente con los elementos suficientes de convicción, se adjunta al presente informe, la siguiente documentación de carácter confidencial, apegándose a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, y del artículo 73 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Oficio número FGE-17S/1/87/2020, al que se anexa ficha informativa de la carpeta de investigación número “B”, que consta de 6 folios.*

II. Premisas normativas.

Del marco normativo aplicable al presente caso, particularmente de la investigación de los hechos denunciados, podemos establecer como premisas normativas incontrovertibles:

1. *El artículo 21 párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Investigación de los delitos.*
2. *Los artículos 131 y 132, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de las obligaciones del Ministerio Público y de las obligaciones del policía.*

III. Conclusiones.

A partir del análisis de los hechos motivo de la queja, de los antecedentes del asunto y de las actuaciones realizadas por la autoridad, de conformidad con las premisas normativas aplicables al caso en estudio, tenemos que se cuenta con la carpeta de investigación registrada bajo el número único de caso “B”, por el delito de homicidio, en perjuicio de quienes en vida respondían a los nombres de “C” y “D”, carpeta en la que se han llevado a cabo diversas diligencias, mismas que se detallan en el apartado de “Antecedentes del Asunto”, y la cual actualmente se encuentra en etapa de investigación; es decir el momento procesal oportuno para que el Ministerio Público encargado de la investigación, realice las diligencias necesarias que permitan obtener elementos para determinar si se cometió un hecho que la ley señala como delito, y la probable responsabilidad de quien lo cometió”. (Sic).

3. En virtud de lo anterior, este organismo protector de los derechos humanos realizó diversas diligencias con la finalidad de allegarse de aquellos medios probatorios que permitieran demostrar la verdad sobre los hechos planteados, lográndose recabar las siguientes:

II.- EVIDENCIAS:

4. Escrito de queja de fecha 16 de julio de 2019, signado por “A”, mismo que quedó debidamente transcrito en el punto número 1 del apartado de antecedentes de la presente resolución. (Fojas 1 a 4).
5. Ofició número DOQ-431/2019, de fecha 18 de julio de 2019, signado por la licenciada Ethel Garza Armendáriz, visitadora general de este organismo, mediante el cual le solicitó al maestro César Augusto Peniche Espejel, entonces Fiscal General del Estado, que remitiera a este organismo copia certificada de la carpeta de investigación número “B”, misma que era tramitada en la Unidad Foránea adscrita a la Unidad Especializada en Investigación y Acusación de los Delitos, en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna.

6. Acta circunstanciada de fecha 13 de noviembre de 2019, mediante la cual la licenciada Mariel Gutiérrez Armendáriz, entonces visitadora de este organismo derecho humanista, asentó que entabló una comunicación vía telefónica con el licenciado “N”, asesor jurídico de “A”, a quien se le informó que no se contaba con el informe de la autoridad, y a su vez, le preguntó sobre la existencia de pruebas en relación a los hechos de la queja, manifestando el licenciado “N” que proporcionaría copias de la carpeta de investigación a fin de integrarlas al expediente. (Foja 16).

7. Oficio número FGE-18S.1/1/451/2020, de fecha 30 de abril de 2020, signado por el maestro Javier Andrés Flores Romero, entonces coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, mediante el cual rindió el informe de ley solicitado por esta Comisión, mismo que se encuentra debidamente transcrito en el punto número 2 de la presente resolución (fojas 19 y 20), al que anexó los siguientes documentos:
 - 7.1.- Copia simple del oficio número FGE-17S/1/87/2020, de fecha 22 de enero de 2020, mediante el cual la licenciada Elizabeth Martha Maldonado, entonces coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales, Zona Occidente, le remitió a la maestra “Ñ”, de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, una ficha informativa elaborada por el licenciado “O”, agente del Ministerio Público de Creel, relacionada con la carpeta de investigación “B”. (Foja 21).
 - 7.2.- Copia simple de la ficha informativa referida en el punto que antecede, misma que contiene una descripción de todo lo actuado dentro en la carpeta de investigación “B”. (Fojas 22 a 27).

8. Escrito de fecha 25 de febrero de 2021, signado por el licenciado “N”, en representación de “A”, mediante el cual realizó diversas manifestaciones relacionadas con el informe rendido por la autoridad. (Fojas 31 a 33).

III.- CONSIDERACIONES:

9. Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto, atento a lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6, 12 y 84, fracción III, del Reglamento Interno de este organismo.

10. Según lo establecido en los artículos 39 y 40, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente, por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción recabados y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o las personas servidoras públicas han violado o no derechos humanos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda nuestra carta magna, para que una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

11. En ese tenor, tenemos que en el caso, la controversia sometida a consideración de este organismo, reside sustancialmente en el hecho de que “A” refirió en su queja, que los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Varios de Creel; han realizado una deficiente integración de la carpeta de investigación “B”, en la cual se investiga el homicidio de dos de sus familiares, de nombres “D” y “C”, señalando una serie de irregularidades e inconsistencias, entre las que señala que ha existido una investigación poco seria, profesional y exhaustiva, y que nunca le han proporcionado copia de la referida carpeta de investigación, pese a haberla solicitado en numerosas ocasiones.

- 12.** Al respecto, la autoridad señaló en su informe, que la carpeta de investigación “B” se inició el día 28 de mayo de 2017, con motivo del hallazgo de dos cuerpos sin vida en la comunidad de San Elías, uno del sexo femenino y otro masculino, quienes posteriormente fueron identificados como los pertenecientes a quienes en vida llevaron los nombres de “D” y “C” respectivamente, carpeta de investigación en la que se habían llevado a cabo diversas diligencias y que se encontraba en etapa de investigación; informe al que anexó una ficha informativa, en la que se hizo una descripción de todas las diligencias que se habían realizado en la carpeta de investigación “B”.
- 13.** De las posturas de las partes, se desprende que existe una contradicción entre el dicho de “A” y el actuar de la autoridad, de tal manera que para dilucidar lo anterior, este organismo considera que es pertinente determinar si en el caso, existió o no una investigación poco seria, profesional y exhaustiva, así como si se le han proporcionado a “A” copias de la referida carpeta de investigación “B”.
- 14.** Para tal efecto, esta Comisión advierte que se trata de derechos relacionados con las facultades de investigación del Ministerio Público y los derechos de las víctimas, por lo que al respecto, previo a realizar un análisis de los hechos y las evidencias que obran en el expediente, es necesario establecer una serie de premisas legales, relacionadas con las mencionadas atribuciones y prerrogativas, con la finalidad de determinar si la autoridad se condujo o no conforme a derecho.
- 15.** De esta forma, tenemos que en cuanto a las facultades del Ministerio Público, el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función...”

16. A nivel reglamentario, el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como algunas de las obligaciones del Ministerio Público, las siguientes:

“Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados (...)

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; (...)

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; (...)

VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;

VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; (...)

IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; (...)

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; (...)

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y...”.

17. Por lo que hace a los derechos de las víctimas, la fracción I, del apartado C, del artículo 20 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“... C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;...”.

18. De forma reglamentaria, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece entre los derechos de las víctimas, los siguientes:

“Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido.

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

... II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; (...)

V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;

IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; (...)

XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; (...)

XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; (...)

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional; (...)

19. Establecidas las premisas enunciadas con anterioridad, este organismo procederá a realizar el análisis de los hechos y las evidencias que obran en el expediente.

20. De acuerdo con el informe rendido por la autoridad, (visible en fojas 19 y 20) y con la tarjeta informativa que acompañó al mismo (visible en fojas 22 a 26), en el número único de caso “B”, se destacan las siguientes diligencias de investigación:

- 20.1.** Testimoniales de identificación de cadáver, a cargo de “I”, “A” y “P”, respecto de “C” y “D”, de fecha 29 de mayo de 2017.
- 20.2.** Oficio número UIDINV-038/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, dirigido al director de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado, para que se practicara la necropsia al cuerpo identificado como “C”.
- 20.3.** Oficio número UIDINV-037/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, dirigido por el agente del Ministerio Público “R” al comandante de la policía investigadora de Creel, Bocoyna, a fin de que se realizaran las investigaciones pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en perjuicio de “C” y “D”.
- 20.4.** Oficio número 46821/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, dirigido al Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos, emitido por el agente del Ministerio Público “S”, a fin de que se brindara apoyo asistencial a la señora “A”.
- 20.5.** Oficio número 46822/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, dirigido al Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos, emitido por el agente del Ministerio Público “S”, a fin de que se brindara apoyo asistencial al señor “I”.
- 20.6.** Oficio número UIDINV-040/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, dirigido al coordinador de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía Zona Occidente, emitido por la agente del Ministerio

Público director “J”, a fin de solicitar una pericial en química forense, rastreo hemático y genética.

- 20.7.** Registro de cadena de custodia de fecha 28 de mayo de 2017.
- 20.8.** Informe policial homologado de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el agente investigador “U”.
- 20.9.** Acta de entrevista de la testigo “Q”, de fecha 29 de mayo de 2017, suscrita por el agente investigador “U”.
- 20.10.** Informe en materia de genética forense de quienes en vida llevaron los nombres de “C” y “D”, de fecha 21 de noviembre de 2017.
- 20.11.** Contestación al oficio número UIDINV-040/2017, emitido por la perita química forense, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, “V”, en el que refirió no haber recibido las muestras necesarias en su laboratorio, por lo que no era posible llevar a cabo lo solicitado en el mencionado oficio.
- 20.12.** Contestación al oficio de criminalística de campo, de fecha 03 de junio de 2017, en el que se establecieron diversas conclusiones relacionadas con el lugar en el que se encontraron los cuerpos de “C” y “D”, la posición inicial y final que guardaban, que fueron arrastrados hasta el desnivel donde fueron encontrados, que sus victimarios trataron de calcinar los cuerpos con fuego, y que al menos una persona participó como agresor.
- 20.13.** Contestación al oficio de realizar un seriado fotográfico, de fecha 03 de junio de 2017, en el que se remitieron 23 fotos del lugar del hallazgo de los cuerpos de “C” y “D”.

20.14. Contestación al oficio de examen de rastreo hemático, de fecha 25 de junio de 2017, en el que se concluye que en las muestras de tejido proporcionadas para ese estudio, se identificó tejido hemático de origen humano.

20.15. Contestación al oficio de examen toxicológico y de alcoholemia, de fecha 25 de junio de 2017, en el que se determinó que de acuerdo con las muestras de sangre de quien en vida llevó el nombre de “D”, no se detectó la presencia de metabolitos provenientes del consumo de drogas o de presencia de alcohol etílico.

20.16. Siendo el resto de las diligencias aquellas que tienen que ver con la autorización para el traslado, la entrega e inhumación de los cadáveres de “C” y “D”.

21. Como puede observarse, la mayoría de las principales diligencias de investigación, fueron ordenadas el día 29 de mayo de 2017, las cuales fueron llevadas a cabo y/o enteradas al Ministerio Público de su realización, en el mes de junio de ese año.

22. Al respecto, cabe hacer mención que la mencionada ficha informativa, es de fecha 22 de enero de 2020, según el sello que aparece en la misma (visible en foja 22 del expediente), mientras que el informe de la autoridad fue recibido en este organismo derecho humanista, el día 13 de mayo de ese mismo año (según consta en el sello que se plasmó en dicho documento, visible en foja 19 del expediente), con lo cual puede concluirse, que si las últimas diligencias fueron realizadas en el mes de junio de 2017, luego entonces, se advierte que entre las últimas diligencias practicadas y la rendición del informe medió un plazo de 2 años 11 meses, aproximadamente, en el que el Ministerio Público no realizó diligencia de investigación alguna, sin que del informe de la autoridad se desprenda alguna justificación para ello.

23. Lo anterior, porque esta Comisión da cuenta de las manifestaciones que el representante de “A”, de nombre “N”, realizó al informe de la autoridad en su escrito de fecha 25 de febrero de 2021 (visibles en fojas 31 a 33), en el sentido de que la

autoridad no dio contestación a las manifestaciones realizadas por “A” en su queja, en el sentido de que ésta le había señalado a la autoridad, que una mujer de nombre “T”, de quien sospechaba que tenía algo que ver con la muerte de “D” y “C”, no había sido investigada y/o entrevistada, además de que otra persona de nombre “L”, quien acompañaba a “C” el día que desapareció, tampoco había sido investigado.

- 24.** Asimismo, dicho representante señaló que aún no se tenía respuesta a un oficio de investigación que el agente del Ministerio Público encargado envió al comandante de la policía investigadora de Creel, en fecha 29 de mayo de 2017 y que la perito en química forense adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, aún no había recibido las muestras necesarias en su laboratorio para poder dar contestación a una solicitud hecha por el Ministerio Público, dato que incluso fue corroborado con la tarjeta informativa que envió la autoridad a este organismo (punto 19.11 de la presente determinación).
- 25.** Por lo anterior, y en vista que la autoridad no realizó manifestación alguna en su informe relacionada con los cuestionamientos que “A” hizo en su queja, y que en el caso, han quedado constatadas las omisiones por parte del Ministerio Público de: dar contestación a algunos oficios; enviar algunas muestras para su análisis en los laboratorios forenses; entrevistar a algunas personas que fueron sugeridas por “A”, mismas que a su juicio pudieran tener información acerca del homicidio de “C” y “D”, a las que el Ministerio Público está obligado a entrevistar por ser datos de prueba aportados por la víctima, o en todo caso, fundar y motivar las razones por las que lo considera innecesario; y entregar a la parte quejosa copias certificadas de la carpeta de investigación “B”.
- 26.** En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, segundo párrafo, 39 y 40 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este organismo considera que el Ministerio Público incumplió con sus obligaciones de investigar, conforme a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, 131, fracciones I, II, V, VIII, IX, XVI y XXIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en consecuencia, violó los derechos humanos de "A", previstos en los artículos 20, fracción I, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 109, fracciones II, V, IX, XIV, XVII y XXII del Código Nacional de Procedimientos Penales, numerales a cuyo contenido se hizo alusión en las premisas legales establecidas en la presente determinación.

- 27.** Así, se considera que en el caso, existe una inadecuada procuración de justicia, en razón de que al omitirse la realización de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos que pudieren resultar constitutivos de delito, si éstas se llevan a cabo de manera deficiente, o se deja de actuar en la investigación correspondiente sin causa que lo justifique, genera que los hechos delictuosos que se denuncian, corran el riesgo de quedar impunes.
- 28.** De igual forma, debe mencionarse que el artículo 7, en sus fracciones I y III, de la Ley General de Víctimas, dispone que las víctimas tendrán, entre otros, el derecho a una investigación pronta y eficaz, que lleve en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; así como a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones.
- 29.** Lo anterior, se ve apoyado con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. El derecho de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con

la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. Ello es así, porque en el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas.²

- 30.** Por lo anteriormente expuesto, este organismo concluye que la autoridad debió asumir una conducta más proactiva y decidida, para continuar con la investigación en la carpeta de investigación “B”, como una obligación propia y no como un mero trámite, evitando que las diligencias llevadas a cabo en la misma o la sugerencia de ellas, quedaran a cargo de “A” o de sus familiares, con lo cual omitió realizar una indagatoria seria, imparcial y efectiva, sin utilizar todos los medios legales a su alcance que le permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, sobre todo si se toma en cuenta que en el caso de la carpeta de averiguación “B”, se trata de hechos delictuosos particularmente graves, es decir, homicidios calificados cometidos en perjuicio de “C” y “D”, los que de acuerdo con el informe de la autoridad y las

² Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 163168. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional, Penal. Tesis: P. LXIII/2010. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 25. Tipo: Aislada.

consideraciones que se han venido realizando en la presente resolución, se advierte no han sido esclarecidos a la fecha, además de que faltan diligencias por practicar, y no se aprecia que la autoridad cuente con alguna línea de investigación que permita dar con el paradero de las personas que pudieran ser responsables.

- 31.** Lo anterior se ve reforzado con el hecho de que la autoridad fue omisa en proporcionar a este organismo una copia certificada de la carpeta de investigación “B”, a pesar de que fue solicitada por la licenciada Ethel Garza Armendáriz, visitadora de este organismo, mediante el oficio número DOQ-431/2019 de fecha 18 de julio de 2019 (visible en fojas 10 y 11 del expediente), de tal manera que lo considerado en los puntos que anteceden, debe tenerse por cierto, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al no contar este organismo con evidencia objetiva que evidencie lo contrario.
- 32.** Es por esa razón que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, segundo párrafo, 39 y 40 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este organismo considera que el Ministerio Público incumplió con sus obligaciones de investigar, conforme a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131, fracciones I, II, V, VIII, IX, XVI y XXIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en consecuencia, violó los derechos humanos de “A”, previstos en los artículos 20, fracción I, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracciones II, V, IX, XIV, XVII y XXII del Código Nacional de Procedimientos Penales, numerales a cuyo contenido se hizo alusión en las premisas legales establecidas en la presente determinación.
- 33.** Por lo anterior, esta Comisión concluye que las personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado, al no haber ejercido sus atribuciones conforme a los numerales invocados en el párrafo anterior, vulneraron los derechos humanos de “A” de acceso a la justicia y a los que tiene en su calidad de víctima.

IV. - RESPONSABILIDAD:

- 34.** Las violaciones a los derechos humanos por los actos y omisiones realizados por las personas servidoras públicas del Ministerio Público que participaron en la integración de la carpeta de investigación “B” analizadas y evidenciadas, adscritas a la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Varios de Creel, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, generan una responsabilidad administrativa, al transgredirse las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción I, V, VII, y 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevén que las personas servidoras públicas deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales correspondientes a su empleo, cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, observando disciplina y respeto y que así lo hagan las personas servidoras públicas sujetas a su cargo, lo que además implicó incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público ya precisadas.
- 35.** En ese orden de ideas, resulta procedente que se instaure un procedimiento administrativo en que se determine el grado de responsabilidad en que incurrieron las personas servidoras públicas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, dependientes de la Fiscalía Zona de Distrito Zona Occidente, adscritas a la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Varios, con sede en la población de Creel, con motivo de los hechos referidos por la persona impetrante, en la integración de la carpeta de investigación “B”.

V.- REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO:

- 36.** Por lo anterior, ese determina que “A” tiene derecho a la reparación integral del daño, con motivo de los hechos que motivaron el expediente en análisis, en los términos de la jurisprudencia que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con base en la obligación para el Estado de reparar las

violaciones a los derechos humanos, considerando además que la responsabilidad del mismo, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, misma que debe ser objetiva y directa, según lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 178, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

- 37.** Al haberse acreditado una violación a los derechos humanos atribuible al Estado, la Recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución de las personas afectadas en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para tal efecto, en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 4, 7, 27, 67, 68, 88 fracción II, 96, 97 fracción II, 106, 110 fracción IV, 111, 112, 126 fracción VIII, 130, 131 y 152, de la Ley General de Víctimas; 6, 20, fracción II, 22, fracciones IV y VI, 36, fracción IV, 37, fracciones I y II y 39, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se deberá reparar el daño de manera integral a “A”, por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y que han quedado precisadas en la presente Recomendación, así como su inscripción ante el Registro Estatal de Víctimas. Debiendo tenerse como parámetro para la reparación integral del daño, lo siguiente:

a) Medidas de satisfacción.

- 37.1.** La satisfacción, como parte de la reparación integral, busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Este organismo considera que la presente recomendación, constituye en sí misma, una forma de reparación.
- 37.2.** Asimismo, la autoridad deberá agotar las diligencias necesarias para que se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, un procedimiento administrativo sancionatorio, en contra de las

personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General del Estado, responsables de las violaciones a los derechos humanos de “A”, es decir, contra quienes incumplieron con sus obligaciones de investigar, no dieron contestación a algunos oficios, omitieron enviar muestras para su análisis a los laboratorios forenses, omitieron entrevistar a algunas personas que fueron sugeridas por “A”, o en todo caso, quienes debían fundar y motivar las razones por las que se consideraba innecesario, y no le otorgaron copias certificadas de la carpeta de investigación “B” a la quejosa, y en su caso, imponerles las sanciones que correspondan.

- 37.3.** Del mismo modo, la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Varios en Creel, Bocoyna, deberá agotar todas las líneas de investigación necesarias en la carpeta “B”, para la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, y resolver a la brevedad posible la carpeta de investigación, conforme a derecho.
- 37.4.** Adicionalmente, la autoridad, tomando en cuenta las consideraciones establecidas en los puntos 21 a 30 de la presente Recomendación, deberá subsanar las omisiones en las que ha incurrido, así como a las que se refirió el representante legal de “A”, en su escrito de fecha 25 de febrero de 2021, concretamente las establecidas en los incisos a), b) y c) de su escrito de cuenta (visibles en foja 32 del expediente), consistentes en la entrevista a una persona de nombre “K”, de quien la quejosa tenía la sospecha de que algo había tenido que ver con la muerte de su hijo y de su esposa, ya que dicha persona había vivido con aquél anteriormente, o de una persona de nombre “L”, quien lo acompañaba el día que desapareció su hijo, que no se había recibido la respuesta de un oficio de investigación enviado a un comandante de la policía investigadora de fecha 29 de mayo de 2017 y que una perita en

química forense, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, no había recibido unas muestras en su laboratorio para poder dar contestación al Ministerio Público; además de otorgarle a la quejosa, copia certificada de la carpeta de investigación número “B”; sin embargo, la autoridad no está obligada a cumplir con las observaciones que el representante legal de “A” hizo en su escrito de cuenta, en los incisos d) y e) del mismo escrito (relativos a tener conocimiento o informar acerca del contenido de una cadena de custodia y del contenido de un informe policial homologado, respectivamente), ya que el referido representante, cuenta facultades legales para acceder a la carpeta de investigación número “B” y se encuentra en posibilidad de verificar por su cuenta la información que afirma desconocer, aclarando que para ello, la autoridad deberá permitirle el acceso a dicha información.

b) Medidas de no repetición.

37.5. Éstas consisten en implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan. En ese sentido, la Fiscalía General del Estado deberá girar instrucciones a los agentes del Ministerio Público, incluyendo la emisión de circulares, para que cumplan con sus obligaciones de investigar, conforme a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131, fracciones I, II, V, VIII, IX, XVI y XXIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, y garanticen el ejercicio pleno de las víctimas, de los derechos humanos establecidos en los artículos 20, fracción I, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 109, fracciones II, V, IX, XIV, XVII y XXII del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- 37.6.** Se hace énfasis en el punto anterior y se invita a la autoridad a que atienda con urgencia estas cuestiones, en razón de que violaciones a los derechos humanos de similar naturaleza a las analizadas en la presente determinación, también fueron objeto de estudio en la **Recomendación número CEDH:5s.1.017/2020**, emitida por esta Comisión, misma que no fue aceptada, destacándose que en ambos casos, las violaciones a derechos humanos acreditadas, provinieron de la misma oficina de Investigación y Persecución de Delitos Varios con sede en Creel, municipio de Bocoyna.
- 38.** Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo prescrito por los artículos 2, incisos C y E, y 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; 13, párrafo II y 14; 49, fracciones II y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, resulta procedente dirigirse a la Fiscalía General del Estado, para los efectos que más adelante se precisan.
- 39.** Conforme a los razonamientos y consideraciones que se han expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional se desprenden evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de "A", en específico el derecho al acceso a la justicia, por parte del personal de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución de Delitos Varios en Creel, municipio de Bocoyna, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de su actuar en el servicio público, mediante la dilación e irregularidades en la procuración de justicia, entendida como el retardo o entorpecimiento en las funciones investigadora y persecutoria de los delitos, realizada por las personas servidoras públicas competentes.
- 40.** En consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como los numerales 84, fracción III, inciso a), 91, 92 y 93 de su

Reglamento Interno, resulta procedente emitir las siguientes:

VI.- RECOMENDACIONES:

A usted, **Lic. Roberto Javier Fierro Duarte, Fiscal General del Estado:**

PRIMERA.- Se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda en contra de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado que hubieren estado involucradas en los hechos de la presente queja, y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

SEGUNDA.- En un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la aceptación de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se inscriba a “A” en el Registro Estatal de Víctimas.

TERCERA.- Se le repare integralmente el daño a “A” conforme a lo establecido en el apartado V de esta determinación.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, primer párrafo de la ley que rige nuestra actuación, tiene el carácter de pública, y con tal carácter se divulga en la gaceta de este organismo, así como en los demás medios de difusión con los que cuenta; y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de que se inicien las investigaciones que procedan por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser

concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y personas servidoras públicas ante la sociedad.

Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstas, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, una vez recibida la Recomendación, la autoridad o persona servidora pública de que se trate, informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta. Entregando en su caso, en otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada.

En caso de que se opte por no aceptar la presente Recomendación, le solicito en los términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la multireferida ley, que funde, motive y haga pública su negativa. No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

ATENTAMENTE

NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA
PRESIDENTE

*RFAAG

c.c.p.- Quejosa, para su conocimiento.

c.c.p.- Lic. Jair Jesús Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para su conocimiento y seguimiento.

C.c.p. Gaceta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.